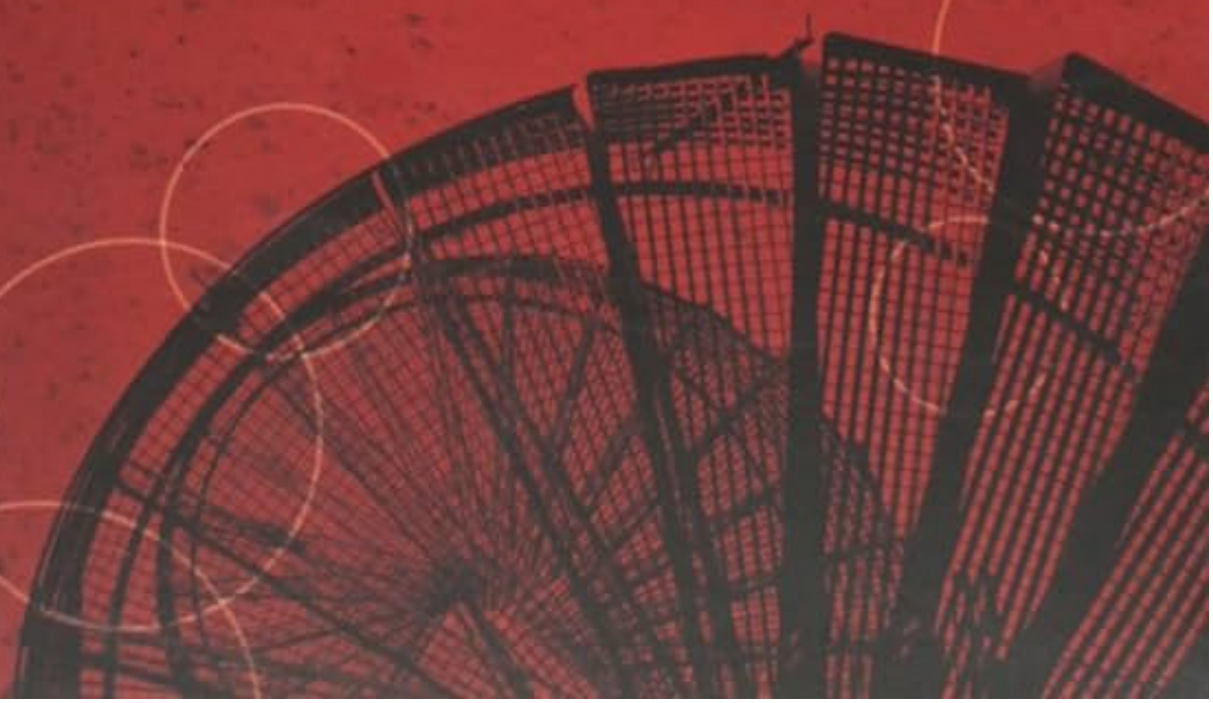
FGV
EDITORA

América Latina

no século XXI

Manuel Antonio Garretón
Marcelo Cavarozzi
Peter S. Cleaves
Gary Gereffi
Jonathan Hartlyn



MATRIZ SOCIOPOLITICA Y DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO EN CHILE[1].

.

Manuel A. Garretón M.

I. La perspectiva del análisis.

Analizaremos la evolución de Chile a partir de mediados del siglo XX. Analizar este período desde un enfoque integral implica realizar un examen a las relaciones sociales entre actores sociales, su gestación, desarrollo y condiciones de interacción y por otro lado las reglas del juego imperante mediante las cuales se relacionan estos actores.

En ello encontramos la utilidad de la complementariedad del concepto de matriz sociopolítica con el análisis neoinstitucionalista .

El concepto de matriz socio-política, supone que una sociedad determinada se define a partir de la particular configuración de las relaciones entre i) Estado, ii) régimen y partidos políticos, y iii) sociedad civil o base social. El concepto de matriz sociopolítica o matriz de constitución de la sociedad alude a la relación entre Estado, o momento de la unidad y dirección de la sociedad; sistema de representación o estructura político-partidaria, que es el momento de agregación de demandas globales y de reivindicaciones políticas de los sujetos y actores sociales, y la base socioeconómica y cultural de éstos, que constituye el momento de participación y diversidad de la sociedad civil. La mediación institucional entre estos elementos es lo que llamamos el régimen político. La perspectiva indicada hace recaer el peso del análisis en los actores, su constitución e interacción.

La matriz sociopolítica muestra un tipo de sociedad que funciona bajo ciertas normas o "reglas del juego" que son determinadas en gran medida por el régimen político. Asimismo, la evolución de la matriz en diferentes etapas hace mutar las reglas del juego y con ello el resultado del período a analizar. La teoría del Cambio Institucional por su parte, se ocupa de analizar el cambio económico, social y político mediante la relación entre instituciones, organizaciones y los costos de transacción que implica la relación entre organizaciones, siendo la principal de ellas el Estado y entendiendo las instituciones como "reglas del juego" formales e informales. Las organizaciones son producidas por la evolución de las instituciones, pero a la vez las primeras condicionan a las segundas mediante relaciones guiadas por acciones que mezclan siempre una racionalidad limitada con elementos no racionales.

Nuestra hipótesis básica es que en Chile hemos asistido en las últimas décadas a la disolución de la matriz que hemos llamado nacional-popular, estatal democrática, político-partidaria, De modo que, recuperada parcialmente la institucionalidad democrática, se plantea hoy una nueva cuestión fundamental. Esta es: qué queda y cómo puede reformularse en el mundo globalizado de hoy un proyecto de Estado-nación, probablemente multinacional si consideramos los pueblos originarios, en que el sujeto principal muy diverso y polivalente es un pueblo que se organiza y decide su destino bajo formas democráticas. Sin una idea fuerza o proyecto nacional-estatal, se deja de ser un país, para transformarse en segmentos dispersos que se pliegan subordinadamente a los

[1] Este documento con la colaboración de Daniel Grimaldi. Hemos utilizado diversos materiales de otros trabajos del autor, especialmente los realizados junto con Malva Espinosa (Ver Bibliografía).

grandes centros que operan en el mundo, es decir, en una suma de poderes fácticos transnacionales y nacionales con una inmensa masa de gente que no logra integrarse y, simplemente, sobra.

II. Bases del sistema socio-económico en el Chile hacia los años 50.

A inicios del siglo XX Chile comienza a gestar lo que denominamos la matriz sociopolítica clásica para América Latina: estatal, nacional, popular, democrática y partidaria para el caso de Chile. El modelo económico y social hasta ese entonces se basaba en un sistema de libre mercado conocido como el modelo de desarrollo hacia fuera, basado en el paradigma más ortodoxo del libre comercio. El modelo económico ortodoxo se combinaba con un sistema oligárquico de democracia restringida con grandes niveles de exclusión política y social . El rol del Estado durante este período fue mínimo y a la par de la expansión capitalista las ciudades de desarrollo minero e industrial que atraían grandes flujos migratorios del campo y del centro del país. En consecuencia, sobrevino una aguda problemática social que puso de manifiesto la crisis del modelo oligárquico, el cual se vio definitivamente colapsado tras la crisis mundial de 1929, obligando a cambiar la estrategia de desarrollo definitivamente e iniciar una nueva era en que el Estado por primera vez asume un rol.

La denominada "cuestión social" de los años 20 para aludir al problema de exclusión insostenible del nuevo proletariado, generó un clima propicio para importantes transformaciones sociales. Desde 1880 hasta los años veinte se fueron generando grupos políticos progresistas de clase media y un emergente movimiento obrero que alcanza un importante nivel de organización hacia 1922 con la fundación del Partido Comunista. Si bien es cierto los grupos progresistas hasta los años 20 no despertaron gran efervescencia electoral, sí ayudaron a colocar nuevos temas en la agenda social y bajo la candidatura del liberal Arturo Alessandri Palma que alcanza la presidencia en 1920 se consiguen importantes avances.

Bajo el gobierno de Alessandri, se redacta una nueva Constitución en 1925 que recibió una fuerte influencia de las doctrinas sociales constitucionales imperantes en el siglo XX a partir de las cartas fundamentales señeras que fueron la Constitución Mexicana (1917) y la Soviética (1918), de forma que la nueva Constitución chilena estuvo destinada a asegurar un grado de bienestar mínimo a los ciudadanos, con la protección explícita del trabajo, la industria y las obras de previsión social (Heise 1977). Gracias a las bases institucionales de la Constitución de 1925, se dicta el código del Trabajo en 1931, un Código Sanitario. Mediante esta Constitución se establece un sistema Presidencialista democrático, para dejar a tras las experiencias traumáticas de parlamentarismo que llevara a fuertes crisis institucionales a finales del Siglo XIX, asimismo establece una nueva ley de elecciones que incorpora la proporcionalidad como principio rector de la representación en el Congreso, la separación absoluta de la Iglesia y el Estado, crea el Banco Central y se dictó una nueva legislación bancaria, la ley de presupuestos y la Contraloría General de la República.

La Constitución de 1925 entregó una base institucional para el desarrollo de los posteriores procesos sociales que veremos más adelante y que ayudan a constituir la matriz sociopolítica clásica basada en elementos como una institucionalidad económica moderna relativamente moderna, democratización política, protección social, rol promotor del Estado, laicismo. Todo ello, sin embargo, con un carácter relativamente

precario y sujeto a regresiones parciales debido, hasta los sesenta, a la exclusión del campesinado y sectores pobres urbanos, y a la presencia de enclaves oligárquicos y económicos como la propiedad extranjera de la gran minería, la resistencia de los sectores propietarios y la falta de coaliciones políticas estables entre el centro y la izquierda, expresiones políticas de los sectores medios y populares respectivamente.

La Gran Depresión de 1929 afectó a Chile de forma estruendosa (ver cuadro 1) más que en muchos países de América Latina y el mundo gracias a que se desplomaron las exportaciones de salitre y cobre por ende disminuyeron los ingresos fiscales y las reservas, lo que devino en cesación de la deuda externa hacia 1931. La estrategia para sortear la crisis fue la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que implicó la disminución de las importaciones, combinadas con políticas de expansión de la demanda interna y control del tipo de cambio. Se abandona el patrón oro y se implementan una serie de medidas destinadas a fortalecer la producción y demanda nacional ante el cierre de los mercados internacionales aplicando cuotas y aranceles, desincentivando la importación de bienes de consumo junto con política monetarias y fiscales anticíclicas (Corbo 1988).

Cuadro 1
Impacto de la Gran Depresión sobre la Economía Chilena (porcentaje)

	Situación en el año 1932 c/ ra		*Situación en el año 1938 c/ra*	
	1929[a]	*1927-29*[b]	*1929*[a]	*1927-29* [b]
PGB	-45,8	-38,3	-7,3	+5,5
Exportaciones	-81,4	-78,3	-38,4	-28,2
Precios exportación salitre	-59,0	-61,1	-45,2	-48,0
Volumen exportación salitre	-78,5	-74,0	-56,8	-47,7
Precios exportación cobre	-69,3	-63,4	-44,8	-34,3
Volumen exportación cobre	-71,4	-68,6	-10,1	-1,2
Importaciones	-86,8	-83,5	-68,7	-60,7
PGB/Capita	-48,2	-42,0	-16,1	-6,0

Fuente: Sáez (1989). Citado en Meller (1996:49)
Nota: Las cifras que se muestran corresponden al porcentaje de variación con respecto al nivel de referencia, esto es, un -45,8% para el PGB significa que el PGB de 1932 cayó 45,8% con respecto al nivel 100 de 1929.
a: (1929=100)
b: (promedio 1927-29=100)

El producto de la aplicación del modelo ISI naturalmente fue el desarrollo de una industria nacional bajo el fomento y protección del Estado mediante instituciones como La Corporación de fomento de la Producción CORFO creada en 1939, que generaron una simbiosis entre un Estado empresario y un sector privado fuertemente subsidiado.

El sistema capitalista permaneció incuestionable en sus bases hasta los años 50 bajo una adaptación circunstancial a la crisis del 29 en primera instancia y posteriormente a la consolidación de una idea o modelo de "Estado de Compromiso", una versión latinoamericana del welfare state nunca consolidado en Chile.

Cuadro 2
Porcentaje de la Industria en el PNB, países seleccionados, 1929, 1945 y 1955

País	1929	1945	1955
Argentina	22.8	25.0	25.0
Brasil	11.7	17.0	23.0
Chile	7.9	23.0	23.0
Colombia	6.0	11.0	15.0
Guatemala	n.d	13.0	11.0
Honduras	n.d	7.0	12.0
México	14.2	19.0	19.0
Perú	n.d	13.0	15.0
Uruguay	n.d	18.0	23.0

Fuente: Furtado Celso, la economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana, santiago, Ed. Universitaria, 1969 p107 y The Cambridge History of latin america, Op cit. . En, Historia de America Latina y el Caribe 1825-2001. Del Pozo, LOM 2002. P.118

La aplicación de estas medidas en una primera instancia fueron más bien una respuesta natural y racional a la crisis, ya que no era posible otra salida viable ante el descalabro financiero internacional y con posterioridad la II Guerra Mundial. Sin embargo hacia fines de la II Guerra Mundial, la profundización de estas medidas se ve reforzada por el surgimiento de una ideología latinoamericanista fundada en la teoría del desarrollo o estructuralismo impulsado por la CEPAL a mediados de los años 40.

III. La matriz estatal-nacional-popular-democrático-partidaria

1. La matriz clásica .

El modelo social chileno o matriz sociopolítica predominante en el siglo XX puede definirse como estatal democrático, nacional popular y político-partidario, y podría caracterizarse por la imbricación entre política y sociedad civil, incluida la economía, con un rol preponderante y articulador del sistema de actores políticos o sistema partidario en torno del Estado.

Se trataba, así, de la afirmación de la identidad de una comunidad nacional que se va haciendo con el trabajo y las luchas de sus actores representativos en el campo político. Ello significa un esfuerzo de incorporación social amplia y la búsqueda de resolución de conflictos en el marco institucional, y no por la fuerza o la coerción y exclusión.

En el plano político, que fue siempre la principal expresión de la idea nacional-estatal-democrático-popular-partidaria, estaba la Constitución de 1925 y una institucionalidad que buscaba el respeto a la ley y a las libertades, al mismo tiempo que la responsabilidad del Estado y del servicio público. También las leyes sociales de la época, el voto universal y la incorporación de masas a la política desde 1920. En esta idea radicó el eje de los proyectos del Partido Radical y los partidos de la Izquierda en el Frente Popular con la integración de clases medias y sectores populares, de la Patria Joven y la Revolución en Libertad del proyecto democratacristiano de los sesenta y de la Vía Chilena al Socialismo encabezada por la Unidad Popular y el presidente Allende entre 1970 y 1973. En el plano socioeconómico, este proyecto se expresó en la industrialización a través del rol dirigente del Estado, la educación pública gratuita y las Universidades de cobertura nacional, la reforma agraria y, más adelante, las nacionalizaciones y el Servicio Nacional de Salud, entre muchos otros hitos significativos. Incluso, en una época ya pasada, el servicio militar cumplió hasta un cierto momento un rol de integración nacional.

Con los gobiernos del Frente Popular desde 1938 a 1952, comienza una etapa sólida de reformas sociales y crecimiento industrial con políticas destinadas a generar una base de infraestructura para la producción y un sistema de protección social para la clase obrera y media. Entre 1940 y 1953, la industria creció en un promedio de 7.5% al año, llegando a aumentar su participación en el PNB de un 7.9% en 1929 a un 23,0 % en 1955 (ver cuadro 2).

Cuadro 3 **Resumen principales reformas entre 1938 y 1952 bajo el modelo sustitutivo de importaciones**	
Inversión en infraestructura	- Nuevas centrales hidroeléctricas en: Ovalle, La Serena, Copiapó, El Salado y Tocopilla. - Construcción de la Central Sauzal sobre el río Cachapoal; - Central Abanico - Central Pilmaiquén.
Creación de nuevas empresas	- Creación de la Corporación de Fomento a la Producción COFO (1939) - Creación de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA) (1944) - Descubrimiento del yacimiento de Manantiales en Magallanes y creación de Enap. (1950) - Creación de la Compañía de Acero del Pacífico S.A. (CAP). (mixta) (1946) - Construcción de la Siderúrgica Huachipato - Creación de la Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA) (1952)
Cobertura social	- Aumento del gasto social de 10% en 1935, a 26.9 % en 1945 y a 28.5 en Si en 1935 el porcentaje del gasto fiscal social destinado a previsión alcanzaba a un 10%, en 1945 llegó a un 26.9%, aumentando a un 28.5% para 1955 - Creación el Servicio Nacional de Salud (SNS) - El número de alumnos en la educación primaria aumentó de 500.000 en 1925, a 797.600 en 1950; - En la educación secundaria, aumento de 63.500 estudiantes matriculados en 1925 a 148.900 en 1950. - En cuanto a la educación universitaria, el incremento fue de 6.200 en 1925 a 11.000 alumnos hacia 1950 - Se creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar.

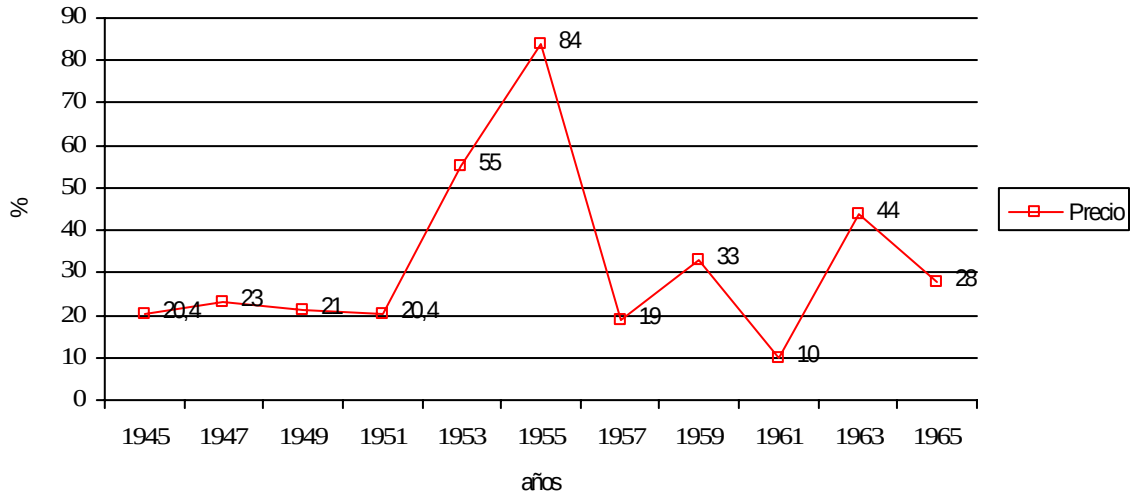
Fuente: Elaborado a partir de Sofía Correa, et. al Historia del siglo XX chileno. Editorial Sudamericana 2001.

Los resultados del período indican que, independientemente de la orientación política o ideológica de los gobiernos que se sucedieron por más de cuarenta años, había un cierto consenso político y social básico en torno al esfuerzo industrializador y al papel del Estado como eje fundamental del desarrollo, mediante instituciones como la CORFO, que controlaba el 30% de la inversión total en bienes de capital, 25% de la inversión pública y un 18% de la inversión bruta total[2]. No obstante, el acuerdo sobre el rol del Estado no quitaba la existencia de discrepancias desde el campo económico y político de la derecha, así como divergencias sobre las orientaciones sociales en el campo mesocrático-popular o de centro-izquierda. La política de industrialización y desincentivo del comercio exterior a su vez tenía una discusión política implícita relacionada con los movimientos de trabajadores representados en las estructuras políticas del Estado y los partidos, estos movimientos obreros establecieron alianzas con el nuevo empresariado industrial en perjuicio del sector agrícola terrateniente más relacionado con las exportaciones (Corbo, 1988), elemento que sería un punto conflictivo a la hora de la crisis del modelo ISI.

[2] Vuskovic, citado en Moss (1973), citado en Meller, Patricio. Un Siglo de economía política chilena (1890-1990). Ed. Andrés Bello. Santiago, 1996. p.59

Hacia fines de los años cincuenta el modelo comienza a colapsar. La inflación y el desempleo fueron signos de severos problemas producto de la aplicación de las medidas proteccionistas sobre la economía, que a pesar de mostrar índices de mejoramiento en cuanto a la calidad de vida y acceso a los servicios en la población, auguraba un muy mal escenario futuro. El gobierno conservador de Carlos Ibáñez del Campo electo en 1952 intentó realizar reformas al modelo cepalino sin éxito con las recomendaciones de la misión económica norteamericana Klein-Saks (1955), restringiendo la oferta monetaria y el gasto público, que dado a lo recesivo de los resultados no pudieron ser aplicadas (Ffrench-Davis 2004).

Gráfico 1
Variación Anual de Precios 1945 - 1965



Fuente: Economía chilena 1810 – 1995: Estadísticas Históricas. Documento de Trabajo 187, Instituto de Economía PUC, enero 2002, Juan Braun y otros, pág. 102

El modelo sustitutivo de importaciones no dio todos los frutos esperados. Las criticas hacia él apuntan a que generó un aparato burocrático excesivo e ineficiente para sostener la infraestructura de beneficios sociales y sectores productivos ineficientes, junto con ello, la anhelada independencia del sector externo no se logró, ya que se elevó la dependencia de importaciones de bienes de capital y materias primas para satisfacer la producción interna, la distorsión de precios mediante subsidios, la falta de competencia y, en consecuencia, alza de precios y desempleo, llevaron al modelo a un cuestionamiento mayor que agudizó la confrontación ideológica entre defensores del modelo cepalino y sus detractores, partidarios de una modernización neoliberal.

Fue en 1958 con la llegada al poder del conservador Jorge Alesandri Rodríguez que se intentó un proceso de reforma capitalista modernizadora, que buscó poner al sector privado como motor del desarrollo pero con una política fiscal activa al estilo keynesiano. Se estableció un tipo de cambio nominal como una especie de ancla para el control de precios, junto con el sustento de créditos externos al gobierno (Ffrench-Dvis 2004). A pesar de lo acertadas de las reformas, éstas no dieron los resultados esperados ni suficientes para sostener un crecimiento de la producción ni el control de precios, puesto que la estrategia modernizadora carecía de una coherencia de mediano plazo con

las medidas de ajuste planteadas y como enseña el Gráfico 1, el control de precios gracias a la contención de las reformas de Alessandri fueron momentáneas. Por otro lado, estas medidas no contaron ni con el apoyo del sector empresarial ni con una mayoría política consistente.

El Gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964), pondría en marcha un proceso de reformas junto con un plan denominado “La Revolución en Libertad” sustentado en una estabilización cambiaria gradual no recesiva, reforma agraria y un fuerte fomento a las organizaciones sindicales campesinas, modernización industrial con un importante rol promotor del Estado en el fomento de la industria de las telecomunicaciones y la industria petroquímica, además del comienzo de la nacionalización del cobre (denominado “chilenización) que más tarde concretaría el gobierno de la Unidad Popular.

Entre 1965 y 1973 se configuran las tendencias reformistas, cuya principal plataforma fue la integración creciente de los sectores populares más pobres de los mundos agrarios y urbanos, en el plano económico, político y social. Bajo el gobierno de Eduardo Frei, las reformas adquirieron un carácter más gradual, en tanto, bajo el gobierno de Allende, la estrategia fue de cambios radicales, fundamentalmente en el plano de la organización económica y social. Exceptuando la ampliación de la ciudadanía, no se plantearon reformas al sistema político-institucional en ninguno de los dos gobiernos reformistas.

Las principales reformas en el campo económico (reforma agraria, nacionalización del cobre) estaban relacionadas con el sistema de propiedad de sectores considerados estratégicos para el desarrollo. A su vez, las reformas de ampliación democrática estuvieron centradas en la organización social y la incorporación a los mecanismos electorales de campesinos, jóvenes y analfabetos. Bajo estos gobiernos, se dictó la ley de sindicalización campesina, que ayuda a la incorporación a la vida política al sector rural, secularmente postergado de sus derechos sociales y políticos; se extendió el derecho a voto a los analfabetos y se rebajó de 21 a 18 años la edad para ejercer el sufragio. Durante ambos gobiernos, hubo un absoluto respeto a la Constitución y al ejercicio regular de las instituciones democráticas y la plena vigencia de las libertades públicas y del Estado de Derecho.

El espectro político sufría un doble proceso: de ampliación, por un lado, con la gestación de partidos de izquierda escindidos de la Democracia Cristiana, y de polarización y rigidización, por otro, a través de la unificación de la derecha en un partido de corte más nacionalista y autoritario (Partido Nacional), la autonomización del centro más ideológico y con proyecto alternativo propio (Democracia Cristiana), y la agrupación de la izquierda en torno a la matriz marxista leninista y un proyecto de corte más radicalmente anticapitalista.

Desde la crisis del 29 hasta 1973, el Estado jugó un papel central no sólo en la orientación del desarrollo y el "ordenamiento" de los actores económicos y sociales bajo un modelo desarrollista común, sino que además fue el articulador social y político por excelencia. Los gobiernos de turno, de derecha, centro o izquierda, mantuvieron políticas económicas de protección a la industria nacional, subsidio a los agentes económicos (como las bajas tasas de interés al crédito) y redistribución del ingreso sistemática y progresiva, asumiendo, por una parte, funciones en la regulación de los

salarios y los precios y, por otra, aumentando las prestaciones sociales de Educación, Salud y Vivienda en el presupuesto fiscal. De hecho, la inversión social es incluso reconocida hoy como uno de los efectos duraderos del desarrollismo. Además, se la valora como una base sin la cual no habría sido posible el crecimiento que hoy exhibe la economía chilena. Los resultados económicos del período analizado muestran tendencias moderadas pero sostenidas de crecimiento, bajo desempleo y tasas razonables de inversión, aunque con altos índices de inflación, lo que muestra el carácter más político del derrumbe de la democracia de 1973.

Cuadro 4
Tasas de crecimiento sectorial anual por período

	Producto Agrícola	Producto Minero	Producto Manufacturero	Servicios Gubernativos	Resto
1920-1930	3,26%	1,89%	1,89%	-2,47%	1,48%
1930-1940	0,86%	0,60%	4,76%	9,07%	3,76%
1940-1950	2,16%	0,33%	8,12%	7,84%	2,22%
1950-1960	1,64%	-0,73%	4,45%	4,32%	4,96%
1960-1970	1,93%	2,57%	5,32%	2,54%	4,58%
1970-1980	2,24%	3,44%	1,14%	1,87%	3,10%
1980-1990	6,02%	3,74%	2,59%	-0,23%	2,85%

Fuente: elaborado en base a :Economía chilena 1810 – 1995: Estadísticas Históricas. Documento de Trabajo 187, Instituto de Economía PUC, enero 2002

Cuadro 5
Principales variables macroeconómicas de los gobiernos de Alessandri y Frei Montalva (a)

	Crecimiento económico %PGB	Inflación anual %	Desempleo nacional % (b)	Crecimiento anual remuneraciones reales %	Exportaciones % PGB	Reservas internacionales (meses de importación) (c)
Alessandri (1958-64)	3,7	25,8	7,5	1,8	14,5	2,2
Frei (1964-70)	3,9	26,2	5,5	8,0	15,4	4,9

Fuente: Banco Central , INE, en Meller, 1996
a: promedio anual del período presidencial
b: período de 1960-64 para el gobierno de Alessandri
c: valor para el último año del período

El rasgo principal de la matriz clásica es la centralidad de la política. Ello no sólo respecto de los procesos económicos. También en la constitución de actores sociales y en el plano de las orientaciones culturales, sin negar la autonomía propia de esta dimensión. Es cierto que estamos en presencia de orientaciones culturales que valorizan

la educación, la igualdad y solidaridad, los proyectos colectivos de nación, el carácter mesocrático, pero donde tampoco están ausentes componentes meritocráticos y también clasistas y oligárquicos, provenientes de la presencia de la cultura del campo o la hacienda. Pero la identidad chilena y el proceso de construcción de identidades colectivas en el interior de ella tuvo a la política como lugar o eje central. Ésta fue mucho más que los procesos que definen el gobierno y sus decisiones. Fue el modo particular de constituirse como sociedad, una forma de vida social. La política fue el principal lugar de respuesta a las preguntas por el sentido, y las instituciones el principal instrumento de esas respuestas, configurando una perpetua ambigüedad o hipocresía entre la aceptación de la norma y la duda de su valor intrínseco.

Pero la particularidad de la política chilena es que se trataba de una política de carácter más partidario que personalizado o populista, como ocurría en otros países de América Latina. La existencia de un espectro ideológico partidario completo, antes que se completara la participación de las masas en la vida social y política, le dio a esta centralidad de la política un carácter altamente ideológico, que se radicalizará en los sesenta y que ligaba ideología abstracta con reivindicacionismo concreto.

Cuadro 6
Resultados de elecciones parlamentarias 1925-1969

Elección	Derecha	Centro	Izquierda
1925	52,2	21,4	0,0
1932	32,7	18,2	5,7
1937	42,0	28,1	15,3
1941	31,2	32,1	28,5
1945	43,7	27,9	23,0
1949	42,0	46,7	9,4
1953	25,3	43,0	14,2
1957	33,0	44,3	10,7
1961	30,4	43,7	22,1
1965	12,5	49,0	29,4
1969	20,0	36,3	34,6

Fuente: Borón (1971) y Valenzuela (1978). Citado en Meller (1996:102)
Nota: En la derecha se incluyen los partidos Liberal y Conservador; en el centro, los partidos Radical, Agrario Laborista y Demócrata Cristiano; en la izquierda los partidos socialista y comunista. A partir de 1965, la mitad de los votos radicales son incluidos en la izquierda y la otra mitad en el centro. Los porcentajes no suman 100% por cuanto no incluyen los independientes o partidos políticos no mencionados previamente.

El modelo nacional popular, estatal democrático y político partidario, que hemos descrito a grandes rasgos, pese a sus realizaciones, mostró grandes contradicciones y limitaciones. Entre ellas, la marginación o subordinación e incorporación tardía de campesinos, pobladores urbanos, mujeres y ámbitos regionales. La exclusión y avasallamiento de diversas formas culturales e identidades no ligadas a la expresión política, especialmente la de los pueblos originarios. El sectarismo consistente en la apropiación e identificación de la idea nacional popular con un determinado sector, social, político o cultural, excluyendo a los otros, segregando en vez de integrar. Una

cultura que no incentivaba la creatividad individual ni la diversidad de expresiones, sino una homogeneidad aparente que ocultaba rasgos de mediocridad, discriminación, clasismo e hipocresía. Por último, una excesiva dependencia de la economía respecto de la política en aquellos aspectos de carácter más estrictamente técnico.

Son precisamente estas contradicciones y la dificultad de superarlas, las que crearán las condiciones propicias para una crisis que será aprovechada por los sectores dominantes de la economía y las Fuerzas Armadas para realizar su propio proyecto socioeconómico y político, ajeno por completo a los principios del modelo vigente hasta entonces. En 1970 hay una crisis de legitimidad del modelo de desarrollo capitalista y de sus consecuencias sociales, pero no del régimen democrático. Durante el período 1970-1973, en cambio, se desarrolla la crisis de legitimidad democrática que provocará el derrumbe de todo el sistema político.

La Unidad Popular y la crisis político económica.

El conjunto de partidos de la izquierda chilena, agrupados en la Unidad Popular bajo el liderazgo de Salvador Allende, compartía con las fuerzas políticas chilenas, en cualquier punto del espectro ideológico, la aspiración revolucionaria del cambio radical y global de la sociedad. En el caso de la izquierda, éste se entendía en el sentido socialista, como la sustitución de la sociedad capitalista, pero, a diferencia de la generalidad de los países latinoamericanos, manteniéndose en el marco de un régimen democrático. Por otro lado, el proyecto de contenido, la transformación del modelo capitalista y el inicio de la transición al socialismo, pagaba el precio de las visiones predominantes de la época, como el determinismo económico de la vida social y política, las elaboraciones ideológicas a través de sistemas relativamente monolíticos de pensamiento y, sobre todo, la ausencia de modelos referenciales para el pensamiento de izquierda que no fueran los socialismos históricos o reales ni la matriz marxista leninista revolucionaria.

Pese a ello, logró formularse tentativamente una visión propia, la "vía chilena al socialismo", cuya mejor expresión doctrinaria es la definición que hace Salvador Allende en su Primer Mensaje al Congreso como Presidente, en 1971, al defender la relación entre democracia política y democracia económica y social. Por su parte, el programa de la Unidad Popular hacía referencia, por un lado, a ciertas metas y formulaciones estratégicas, y por otro, a medidas específicas de corte básicamente redistributivista y de satisfacción de necesidades de las grandes mayorías. El vínculo entre ambas era la expropiación de los monopolios, que daría al Estado el excedente necesario para reorientar el aparato productivo hacia la satisfacción de tales necesidades.

Con un espíritu eminentemente anticapitalista, el programa económico de la Unidad Popular, se enfocó en una política redistributiva en pos de la democracia económica, basada en cambios estructurales en la propiedad mediante un programa de nacionalizaciones dirigido a la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón; la banca, el comercio exterior y los monopolios estratégicos. Se intervinieron empresas privadas de distribución consideradas estratégicas y otras fueron tomadas por organizaciones de trabajadores arbitrariamente al igual que muchos predios agrícolas no alcanzados por la reforma agraria del período anterior (ver cuadro 8). Por otra parte se redujeron las tarifas de los servicios públicos y aumentaron los salarios mediante

emisión de circulante del Banco Central provocando una fuerte inflación que llegó a un 293% en 1973 (ver cuadro 9).

Cuadro 7
Reforma agraria en los gobiernos de Frei y Allende

	Expropiaciones		"Tomas" Nº de predios
	Nº de predios	Área (miles de hectáreas)	
Gobierno de E. Frei. M. (1964-1970)	1.400	3.557	241*
Gobierno de Salvador Allende (1971-1973)	4.409	6.409	
1971	1.379	2.027	1.278
1972	2.189	3.013	1228
1973	836	833	n.d

Fuente: Martner (1988). Kay (1992) . En Meller (1996:143)
para las cifras de "tomas"; el desglose de la información anual de las "tomas" es el siguiente: año 1965: 13; año 1967:9; año 1968: 26; año 1969: 148; año 1970: 456.
* incluye cifras correspondientes al período 1965-69

Cuadro 8
Comparación de variables macroeconómicas claves: 1959-1973 a

variable	Alessandri 1959-64	Frei 1965-70	Allende 1971-73
Crecimiento del PIB % b	3,7	4,0	1,2
Crecimiento exportaciones % c	6,2	2,3	-4,1
Tasa de inflación d	26,6	26,3	293,8
Tasa de desempleo	5,2	5,9	4,7
Salario real (1970=100)	62,2	84,2	89,7
Inversión Bruta fija (% del PIB) En pesos de 1977	20,7	19,3	15,9
Superávit del gobierno general (% del PIB)	-4,7	-2,5	-11,5

Fuente: Banco central de Chile y DIPRES, Jadresic (1986;1990); Marcel y Meller (1986); Larraín (1991). Citado en Ffrench-Davis (2004) (extracto del cuadro completo hasta 2003)
a : Tasas acumulativas anuales de crecimiento del PIB y exportaciones; tasas anuales promedio en inflación y desempleo
b: en pesos de 1977
c: en pesos de 1977
d: Diciembre a diciembre

Más allá de las insuficiencias teóricas y programáticas del proyecto de la Unidad Popular y de un discurso que exacerbaba la identidad del actor social popular, haciéndolo excluyente y confrontativo, se trataba de la búsqueda de la cuadratura del círculo: hacer una revolución por métodos no revolucionarios y democráticos, sin contar con la mayoría institucional que, en Chile, se construye sólo a través de los partidos políticos. La necesidad de una estrategia de construcción de mayoría, de cuya ausencia la Democracia Cristiana tiene también una cuenta que saldar con su pasado, es la gran lección del período. Y, sin duda, la Concertación de Partidos por la Democracia que sucede al régimen militar en 1990 no se explica sólo por la necesidad de lucha contra la dictadura militar, sino también, precisamente, por el aprendizaje de dicha lección. De cualquier modo, analizar la realidad del período 1970-1973 y de su culminación en el golpe militar de 1973 sólo en términos de un fracaso por debilidad e inviabilidad de un proyecto y su estrategia sería pecar de desconocimiento. Esos tres años estuvieron marcados por una lucha política, en que un sector de la oposición a la Unidad Popular y al gobierno de Allende intentó, desde el primer momento, su derrocamiento, objetivo que también era buscado, en esa época, por el gobierno norteamericano.

IV. El proyecto autoritario neo-liberal.

Entre 1973 y 1989 se produce la interrupción del régimen democrático con el Gobierno militar de facto, bajo el liderazgo de Augusto Pinochet[3] El golpe de Estado pone fin a la regularidad institucional que había vivido el país, con escasas interrupciones en más de 150 años de vida republicana, con la disolución del Congreso; la asunción de la facultad legislativa por una Junta de Gobierno; la prohibición de los partidos políticos; la suspensión de los mecanismos electorales, la práctica eliminación de las libertades públicas, la represión masiva y sistemática de quienes se consideraba partidarios del gobierno anterior y opositores al nuevo régimen, la subordinación del Poder Judicial al gobierno de facto. El modelo institucional del régimen autoritario se consolida al aprobarse en un plebiscito fraudulento la Constitución de 1980 que dará lugar a un proceso de institucionalización autoritaria, que desembocará ocho años después en el plebiscito de 1988.

Estamos aquí frente a la presencia de un proyecto contrarrevolucionario. La historia del régimen militar chileno desde 1973 hasta 1981/1982, es la historia de un doble proceso. Por un lado, la represión y desactivación de los actores previamente constituídos, lo que dada la naturaleza de tal constitución, pasa por la supresión de la actividad político partidaria, que se manifiesta en un primer período bajo el manto de la Iglesia. Por otro lado, la personalizació, mezclando los rasgos de dictadura personal y régimen institucional, del poder político y militar en el general Pinochet y la conformación de un núcleo hegemónico donde se combina este poder político personalizado con la conducción socio-económica del Estado a cargo de un equipo tecnocrático ligado muy rápidamente al capitalismo financiero, conocido como los Chicago Boys.

El contenido principal del proyecto civil-militar era, por un lado, revertir las relaciones entre economía y Estado, reduciendo éste al máximo posible en sus tareas integrativas, y redistributivas y en su papel de referente de la acción colectiva, sin dejar de usarlo para las tareas coercitivas y para la implantación del modelo mismo. Por otro lado, se trataba de impulsar un conjunto de transformaciones sociales e institucionales, que fueron conocidas como "modernizaciones", cuyo significado principal era la atomización de las relaciones sociales, reduciéndolas a mecanismos de mercado y cortando su vinculación con la acción política.

La fórmula autoritaria-neoliberal se planteó como una superación radical de las fórmulas precedentes, la capitalista tradicional, la fórmula mixta de los sesenta y la de orientación socialista de la Unidad Popular. Con la supresión de la política, el régimen militar pudo realizar las transformaciones que el núcleo tecnocrático estimó necesarias, las que se impusieron desde el Estado, sin contrapesos sociales. Los costos sociales del ajuste han sido largamente analizados y los efectos sobre la sociedad actual y futura son indudablemente una onda de largo plazo. La fórmula neoliberal produjo no sólo una reestructuración económica, sino también una intervención en la política, que significó un modelo institucional de régimen, plasmado en la Constitución del 80; un reordenamiento social que significó la emergencia del actor empresarial y la disolución de los actores

[3] De la mucha literatura sobre el régimen militar de Pinochet, ver C. Hunneus, **El régimen de Pinochet** (Editorial Sudamericana, Santiago, 2000). Para los temas económicos, R. Ffrench Davis **Entre el neo-liberalismo y el crecimiento con equidad (2004)**.

sociales populares; y cambios en las orientaciones culturales de los actores sociales y políticos.

El plan económico estabilizador y refundacional del Gobierno Militar se basó en la desarticulación del Estado de Compromiso de la matriz sociopolítica clásica, y la construcción de un nuevo proyecto que devendría , desde el punto de vista de nuestro enfoque analítico en un matriz neoliberal. Primeramente se establecieron políticas para controlar los desequilibrios macroeconómicos con principal prioridad el control de la hiperinflación y posteriormente la apertura comercial unilateral e indiscriminada, la liberalización de los precios y del mercado financiero. Asimismo, se comenzó a desmantelar el aparato estatal sobre todo el sistema empresarial estatal por medio de privatizaciones, inclusive de algunas áreas tradicionalmente pertenecientes al Estado como es el sistema de pensiones y la atención en salud. El endeudamiento externo fue un pilar fundamental para implementar las reformas de la nueva economía, arma de doble filo que luego en 1982 hizo caer a la banca chilena en default con la crisis de la deuda mundial.

Cuadro 9
Comparación situación económica anterior a la crisis política y después del golpe

	Situación 1972-73	**Situación post 1973**
Privatización	Estado controla más de 400 empresas y bancos	En 1980, 45 empresas (incluyendo un banco) pertenecen al sector público.
Precios	Control Generalizado de precios	Precios libres (excluyendo salarios y tipo de cambio)
Régimen comercial	Tipo de cambio múltiple. Existencia de prohibiciones y cuotas. Tarifas elevadas (promedio 94% y 220% arancel máximo). Depósitos previos de importación (10.000 %)	Tipo de cambio único. Arancel Parejo de 10% (excluyendo automóviles) No existen otras barreras comerciales
Régimen fiscal	Impuesto (“cascada”) a la compraventa. Elevado empleo público Elevado déficit público	Impuesto al Valor Agregado (20%) Reducción del empleo público Superávit públicos (1979 – 81)
Mercado interno de capitales	Control de la tasa de Interés. Estatización de la banca. Control del crédito	Tasa de Interés libre. Reprivatización de la banca. Liberalización del mercado de capitales.
Cuenta de capitales	Total control del movimiento de capitales. El gobierno es el principal deudor externo	Gradual liberalización del movimiento de capitales. El sector privado es el principal deudor externo.
Régimen laboral	Sindicatos poderosos con gran poder de negociación. Ley de inamovilidad. Reajustes salariales obligatorios. Altos costos laborales no salariales (40% de los salarios).	Atomización sindical con nulo poder de negociación. Facilidad de despido. Drástica reducción del salario real. Bajos costos laborales no salariales (3% de los salarios)

Fuente: Meller (1996)

Junto con la introducción de cambios radicales en la economía (liberalización, apertura externa y privatización) el gobierno militar transformó las políticas sociales. Estos cambios se movieron en seis direcciones principales:

1. Drástica reducción de recursos, afectando con particular intensidad vivienda, salud y educación (y dentro de ellos, las mayores reducciones en inversión y remuneraciones para el personal en esos sectores);
2. Transferencia de funciones ejecutivas y reubicación de servicios al sector privado y desconcentración geográfica de ministerios y servicios;
3. Introducción de mecanismos de mercado en la asignación de recursos públicos (subsidio a las demandas);
4. Implementación de medidas concretas dirigidas a reducir literalmente los programas universales y focalizar los recursos públicos para ser gastados en los segmentos más pobres de la población.
5. Desarrollo de programas sociales compensatorios para situaciones de extrema pobreza; y
6. Debilitamiento del poder de los trabajadores y de los sindicatos con un estricto control de la expresión colectiva de demandas sociales.

A pesar de la falta de un coherente "paquete de reformas administrativas", como tales, el gobierno militar, desde el momento del primer ajuste de política en 1975, ejecutó un conjunto de medidas que transformaron profundamente el aparato del Estado. Entre esas están las masivas privatizaciones de empresas públicas -dejando algunas privatizaciones "pendientes" y eximiendo la gran minería del cobre- como también la privatización de los servicios públicos, especialmente la seguridad social; la reubicación de las funciones de servicios públicos; la reubicación del déficit fiscal de las municipalidades en áreas de la educación y la salud; la drástica reducción de empleados públicos y la eliminación de agencias; la reestructuración y debilitamiento de ministerios "sociales" y la modernización de los "económicos"; la nueva regionalización del país con un sello militar; legislación administrativa que generó creciente inestabilidad; y el establecimiento de una Ley Orgánica Constitucional, la cual hizo que las modificaciones a este cuerpo legal fueran enormemente difíciles.

Consecuentemente, a pesar de algunas medidas iniciales de racionalización financiera y administrativa, en la práctica, resultó un deterioro pronunciado de la gestión pública, dado que las autoridades económicas del régimen militar consideraban al Estado, por definición, ineficiente. La permanente arbitrariedad, autoritarismo y devaluación de las funciones públicas devastaron la moral de los burócratas. Sus salarios fueron reducidos desproporcionadamente por los ajustes fiscales. El gobierno de Pinochet, obsesionado con las privatizaciones, abandonó a los empleados de los servicios públicos a su destino (Marcel, 1994).

Así, se promovió una noción extremadamente negativa del rol del Estado, identificando modernización y administración eficiente con el sector privado. El pensamiento político dominante asoció al sector público con anticuadas, burocráticas y anacrónicas ideas e imágenes. Como consecuencia, todos los empleados públicos fueron injustamente considerados como ineficientes. Esta prejuiciosa visión, que rechazaba las funciones y

efectividad de las políticas públicas, continuó bajo los siguientes gobiernos democráticos, entre los grupos políticos de derecha y sectores empresariales. Detrás de estos argumentos hay, por una parte, un interés en impedir la generación de estrategias de regulación, y por otra, un interés en privatizar todo lo disponible en capital y servicios públicos (Díaz, 1988). Pero aquí, adicionalmente, hay también un aspecto político ideológico mayor: castigando a un sector que es visto como responsable por la crisis de 1973 y eliminando la intervención estatal, entendida como la principal causa de la politización de la sociedad. Neoliberales y neoconservadores, subrayando la ineficacia de la acción del Estado y sus supuestamente efectos dañinos en el crecimiento económico, de hecho comenzaron un poderoso freno en la modernización endógena de la administración pública, oponiéndose a varias iniciativas de reforma intentadas por los gobiernos democráticos (Oyarce, 1997).

En 1981/1982, producto de la crisis de la deuda se produce una crisis del modelo económico que permitió la irrupción de protestas populares y de la oposición en el espacio público. Es a partir de 1986 que el régimen logra recomponer en parte su modelo económico y preparar el escenario del plebiscito de 1988, en el que la oposición acepta participar para transformarlo de mecanismo de proyección del régimen en mecanismo de desencadenamiento de un proceso de término de la dictadura y paso a un régimen democrático.

Cuadro 10
Resultados del "milagro económico" del régimen militar

	1973	1980	1981
Inflación anual			
IPC (revisado)	606,1	31,2	9,5
IPM	1.147,10	28,1	-3,9
Crecimiento económico (PGB)	-4,3	7,8	5,5
Exportaciones (millones de US$)			
Exportación total	1.309	4.705	3.836
Exportación no tradicional	104	1.821	1.411
Reservas Internacionales	167	4.074	3.775
(millones de US$)			
Déficit presupuestario	21	-5,5	-2,9
(porcentaje PGB)			
Aumento anual de salarios reales (%)	-25,3	8,6	9

Fuente: Banco Central; Ministerio de Hacienda. En Meller (1996)

Es cierto que el régimen militar logró imponer un nuevo modelo de desarrollo, pero ello fue después de un estruendoso fracaso en los años 1981-1982, que significó crecimiento regresivo durante un período, logrando una cierta recuperación a partir del año 1986, no tiene sentido, entonces, hablar de un milagro económico chileno. Sin embargo no existió tal recuperación respecto de ningún indicador social si se compara con los años setenta.[4]

[4]. Para señalar sólo uno, si se mira el plazo largo de la historia económica que se ha reseñado en este trabajo,

En síntesis, la dictadura militar y su modelo neo-liberal produjeron un cambio en la matriz socio-política chilena, aunque como no creó una nueva, implicó básicamente su desarticulación.

V. Democracia y matriz híbrida.

La transición política en Chile se desencadenó con el resultado del Plebiscito de 1988. En ese momento, se canceló definitivamente toda posibilidad de regresión autoritaria pese a las intenciones claramente no democráticas del pinochetismo civil y militar. Y ella terminó con el ascenso del primer gobierno democrático en Marzo de 1990. Desde entonces, cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centro izquierda, formada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD), y, de menor importancia, el Partido Radical Social Demócrata, han dirigido con dos Presidentes demócrata cristianos (Patricio Aylwin 1990-1994; Eduardo Frei 1994-2000) y dos socialistas-PPD (Ricardo Lagos 2000-2006; Michelle Bachelet 2006-2010). Se resolvía así parcialmente uno de los grandes problemas de la sociedad chilena en el sigloXX: la existencia de una imbricación entre actores sociales y sistema partidario se había expresado al nivel de cada polo partidario democrático progresista, pero, con la excepción del Frente Popular de finales de los treinta, no se había expresado en una coalición democratico progresista que uniera centro e izquierda. Y decimos parcialmente, porque la configuraciópn de los actores sociales había vambiado de tal modo que ya no era igualmente reprsentable en su integridad por el sistema partidario.

El primer gobierno democrático, de Patricio Aylwin, definió la tarea nacional en términos de "transición a la democracia" y apuntó hacia la idea de un "crecimiento con equidad", manteniendo los equilibrios macro-económicos y buscando corregir los efectos sociales del modelo económico. Asimismo, definió un método de negociaciones y acuerdos puntuales que llamó "democracia de consensos". Lo cierto es que ya no se estaba en ninguna transición ni tampoco hubo, como hemos dicho, verdaderos consensos. Pero, en todo caso, cualquiera sea la crítica que se haga a estas definiciones por parciales o insuficientes, hay que reconocer que metas y orientaciones hubo y que, en términos de ellas, el gobierno avanzó. Al contrario, cabe recordar que durante el segundo gobierno de la Concertación - pese a una muy buena performance económica hasta 1997 y a los importantes avances en términos de obras públicas y de reforma a la justicia y a la educación, en materia de proyectos y orientaciones, de metas que movilicen energías sociales y culturales, el país fue a la deriva, sin una brújula compartida y, por lo tanto, sin conducción política. . En el gobierno de Ricardo Lagos, se recuperó el liderazgo presidencial: La meta fue planteada en términos de ser un país desarrollado en el segundo centenario de la existencia como nación independiente. Sin embargo, tal meta, pese a los enormes avances en materia de infraestructura, reformas sociales e inserción internacional está lejos de conseguirse ni tampoco pareciera que el conjunto de los actores sociales y políticos se encaminan con claridad en la misma dirección. En el gobierno de Bachelet, primer gobierno paritario en

---

es posible afirmar que la redistribución regresiva del ingreso acaecida bajo el régimen militar significó para la población chilena la pérdida no sólo de una década como se afirma en los diagnósticos de América Latina en los ochenta, sino la pérdida de cuatro décadas. En los cincuenta el porcentaje de familias en estado de pobreza era de alrededor de 40 %., la misma proporción que exhibía el país a comienzos de los noventa.Una completa revisión de las políticas económicas de la dictadura y los indicadores respectivos, en R. Ffrench Davis, **Entre el neo-liberalismo...**op.cit

el Ejecutivo de hombres y mujeres dirigido por una mujer en América Latina, y que es de sólo cuatro años de acuerdo a las reformas constitucionales de 2005, lo que ha primado, tanto en la campaña como en los primeros diez meses del gobierno es la idea de un nuevo estilo, llamado "ciudadano". Este se define por agendas de medidas concretas, pero que por carecer de un proyecto u horizonte político que le dé sentido al conjunto del accionar gubernamental, con excepción de la propuesta genérica de un sistema de protección que se materializaría en una reforma previsional anunciada a fines del 2006, ha sido desbordado por problemas que no estaban en la agenda, el más significativo de los cuales fue el movimiento estudiantil de la educación media.

Pero el término de la transición no significó que, junto a gobiernos plenamente democráticos, el régimen político y la sociedad hubieran alcanzado la democracia propiamente tal. Se trató de una transición incompleta que dio origen a una democracia restringida, de baja calidad y llena de enclaves autoritarios. La tarea no era ni continuar con la transición, ya terminada, ni consolidar el nuevo régimen post-autoritario que ya estaba consolidado en la medida que no había regresión autoritaria posible. Era reformar profundamente ese régimen y generar una auténtica democracia política donde no fueran los poderes fácticos o las minorías políticas las que fijan los límites de la voluntad y soberanía populares. En otras palabras, había que resolver los problemas dejados por la transición y que ésta no había resuelto.

Los éxitos relativos de la democratización política chilena pagaron un costo que puede apreciarse en los grandes problemas no resueltos, es decir, fracasos relativos debidos no a la naturaleza misma del proceso, sino a su conducción política.

Se ha insistido mucho en el carácter consensual de la transición chilena.,Lo cierto es que lo que ha primado, ha sido la ausencia de debate sobre los grandes temas que definen la sociedad y las bases fundacionales de la democracia, compensado sólo por la ilusión del consenso. Este sólo existió, en realidad, para terminar con la dictadura. Lo que hubo después fueron acuerdos circunstanciales o puntuales entre gobierno y oposición. Pero nadie en ninguna parte del mundo habría osado llamar a estos últimos "democracia de consensos". La ausencia de verdaderos consensos en los temas básicos de reconstrucción de la sociedad post-dictatorial, se explica, por un lado, por el veto de la minoría y los poderes fácticos (organizaciones empresariales, grupos económicos que controlan los medios de comunicación, las mismas Fuerzas Armadas , en parte, el Poder Judicial, la minoría electoral de derecha con capacidad de veto dado el sistema electoral. Por otro, porque no ha habido debate sobre los temas cruciales o este debate ha sido ahogado por las exigencias de estabilidad económica o política. Por último, porque sigue existiendo un trauma del disenso, el conflicto y la confrontación, a los que se demoniza o patologiza. Y para que haya consenso societal básico, debe haber debate y conflicto.

En este sentido, los problemas centrales sobre los que ha existido un debate limitado en algunos casos y nulo en otros, pero que en ninguno han dado origen a consensos, son la cuestión de la justicia en materia de violación de derechos humanos bajo la dictadura, la reforma regional, el problema mapuche, el tema de la igualdad y la redistribución, los temas ligados a la convivencia y la reproducción vetados en general por la Iglesia, el modelo constitucional, la reformulación del modelo de desarrollo ante la globalización, etc. Vale la pena indicar, en cambio, que un cierto consenso sobre la prioridad de la educación, que dio origen a la reforma educacional en el gobierno de Frei pero que acusó sus límites con la movilización estudiantil de 2006 originándose un nuevo debate y nuevos

mecanismos de consenso otra vez parciales y precarios, la lucha contra la pobreza, que generó la Comisión Nacional contra la Pobreza aunque se omitió el tema de redistribución, y la modernización de la Justicia y la reforma del Código Penal con la creación del Ministerio Público y el juicio oral, son sin duda avances importantes.

Sinm duda que democratización política chilena fue exitosa en la medida que desplazó a la dictadura, impidió la descomposición de la sociedad al controlar las variables macro-económicas, y aseguró un gobierno formado por la coalición democrática mayoritaria. Pero no puede hablarse de "transición ejemplar" o "exitosa" si se consideran el resultado de este proceso y la calidad de este régimen democrático. Este se caracteriza por la precariedad institucional, la presencia de poderes fácticos y la debilidad de representación debido a las tensiones entre actores políticos y sociedad. Asimismo, por la fragilidad de sus bases culturales, debido a la ausencia de consensos básicos, y a la falta de cohesión, unidad y dirección societal, debida al resquebrajamiento del poder estatal[5].

La ausencia de una crisis económica inicial, que, en muchos otros casos de transiciones, alteró la correlación de fuerzas pro-democráticas y abrió espacios de desestabilización o deslegitimación, por parte de poderes fácticos o por distanciamiento de sectores medios y populares, no forzaba a los primeros gobiernos democráticos a políticas que tuvieran efectos anti-populares o regresivas para resolver una crisis coyuntural heredada. No se había heredado una crisis sino un modelo, lo que en es un problema estructural mucho más grave, que había al menos que corregir sino sustituirlo.

Sin embargo, la consecuente oportunidad de concentrarse en los aspectos propiamente políticos para completar la transición superando los enclaves autoritarios, desgraciadamente no fue aprovechada y la prioridad absoluta dada a la estabilidad económica, desincentivó la constitución y acción de movimientos y actores sociales y dañó su relación con la política y los partidos.

Es cierto que Chile se ha destacado en el último decenio entre sus pares latinoamericanos por ser una notable economía emergente de la región y los índices en materia de ingreso, crecimiento, superación de la pobreza, resumidos en los índices de desarrollo humano, son de los mejores de la región. Sin embargo, subsisten los problemas en torno al modelo socio-economíco que mencionaremos y que pueden erosionar no sólo el dinamismo del crecimiento, sino que pondrán en peligro los avances realizados y la existencia misma del país como comunidad en el plano social. Ello ha estado en el origen de las discusiones en torno a la corrección o cambio del modelo económico, que en la campaña presidencial de 2005 fueron planteadas principalmente por la candidatura de la izquierda fuera de la Concertación.

El primero de estos problemas se refiere al ritmo, tipo y metas del desarrollo económico. Se ha planteado la meta de ser un país desarrollado en el 2010, lo que ya será imposible tanto en términos de ingreso per cápita como en términos de una

[5] Sobre el proceso de democratización chilena, véase, entre otros, E. Boeninger, **Democracia en Chile**, op.cit. P. Drake y P Jaksic, eds. **El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990** (Santiago, FLACSO,1993), que incluye la segunda mitad del régimen militar, M-A: Garretón, **Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones** (Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1995). Una revisión más reciente, A. Menéndez y A. Joignant eds. **La Caja de Pandora. El retorno de la transición chilena** (Planeta/Ariel, Santiago 1999).

distribución "desarrollada" de los frutos del crecimiento. Y es aquí, entonces, donde se plantea el problema de fondo. El modelo de crecimiento del mundo sobre la base del papel principal de las fuerzas transnacionales de mercado y de lo que se ha llamado la nueva economía, ha dejado de ser un modelo de desarrollo. Crecimiento y desarrollo ya no van de la mano y el problema estructural del empleo es la mejor ilustración al respecto, lo que exige intervenciones directas del Estado y la sociedad en la economía. Pese a que se han firmado acuerdos económicos internacionales de enorme significación, y se han realizado reformas socio-económicas como el Plan Auge en Salud o Chile Solidario en materia de lucha contra la pobreza, ellas son claramente insuficientes. La discusión en torno a la naturaleza misma del modelo de crecimiento basado en exportaciones sin alto valor agregado y con una tasa desempleo que parece estructural, apenas ha tenido esbozos que muy luego son apagados, por cuanto en todos los ámbitos parece que las únicas voces que influyen y que fijan incluso la agenda de los organismos públicos son las de los grandes grupos y organismos empresariales, sus organizaciones gremiales y sus medios de comunicación.

Y éste es precisamente el segundo gran problema no resuelto por el modelo de socio-económico chileno, el de los actores del desarrollo. Por un lado, el país ha vivido un clima cíclico de relaciones entre gobierno y sectores empresariales, pasando de guerrillas verbales con recriminaciones por parte del gobierno y amenazas del sector empresarial, a declaraciones de plena confianza y respaldo mutuo, especialmente cuando se hacen presentes buenos resultados de la política económica. Lo cierto es que, pese a significativas excepciones, el nivel de ideologización y los intereses desatados de ganancia a toda costa tan generalizados, hace que Chile no pueda contar con uno de los motores necesarios del desarrollo económico en el actual modelo de economía vigente en el mundo, como es una clase empresarial con responsabilidades, no frente a ganancias a cualquier costo o a sus caprichos extra-económicos, sino frente al país, para lo cual necesita pensarse en términos de éste y del papel propio como agente de desarrollo en permanente cooperación y relación con el Estado.

Por otro lado, subsiste una actitud crítica o tímida respecto del papel más activo del Estado en su capacidad dirigente y movilizadora. Es cierto que en una economía altamente globalizada como la chilena en comparación, por ejemplo a los socios principales del Mercosur, se hace muy difícil la formulación de políticas económicas activas. Pero también es cierto que en lo referente al rol regulador e incentivador en la economía, protector en lo social, redistribuidor de recursos y riquezas y generador de igualdades, y promotor de áreas indispensables como la investigación o el medio ambiente, con la excepción de las obras públicas, el Estado está aún atrasado y presa de las auto-limitaciones que la ideología neo-liberal ha impuesto como sentido común. La misma modernización del Estado, aunque ha producido avances interesantes en la informatización y en los niveles de atención al usuario, no ha escapado a la perspectiva de medirse con los indicadores propios del mundo privado o del mercado. Reinstalar el papel dirigente, regulador y protector del Estado sigue siendo una tarea prioritaria, sin la cual no podrá resolverse el problema de las desigualdades a que haremos mención. Cabe recordar que la participación del Estado en el producto nacional es muy baja y que hay un amplio margen para caminar desde un modelo liberal a uno social-demócrata sin que ello afecte el crecimiento.

El tercer problema se refiere a las consecuencias de la situación económica en el campo social, las que han significado un relativo estancamiento, especialmente en lo referido al

empleo, las igualdades socio-económicas y la capacidad de acción de los grupos y sectores sociales más afectados.

Respecto del empleo, aún cuando se han producido avances indudables como el seguro de desempleo y la creación de nuevos puestos por parte del Estado y cuando las cifras de desempleo han descendido en el último año con una creación importante de empleos, la cuestión de fondo permanece: hoy el crecimiento ha dejado de ser equivalente a desarrollo, integración social y, por lo tanto, en términos de la OIT "empleo decente para todos", lo que obliga a introducir ya sea modificaciones al modelo de crecimiento, ya sea acciones complementarias que pueden ser contradictorias con algunas de sus premisas o supuestos, de modo de volver a vincular crecimiento y desarrollo.

En el plano de las desigualdades socio-económicas, hay que recordar que éste es el principal talón de Aquiles de la sociedad chilena, en la medida que la pobreza, al menos en la dimensión estadística, se ha reducido significativamente, como hemos indicado, en gran parte debido al crecimiento y a políticas sociales eficaces del Estado. En la campaña presidencial del 2005/2006 volvió a aflorar el tema de la desigualdad como el principal problema de la sociedad chilena y ello penetró todas lasa candidaturas, incluida la derecha. Sin embargo, el elemento principal para generar una mayor igualdad, que es la redistribución, uno de cuyos elementos indispensables es la reforma tributaria, ha estado ausente de los programas tanto de la derecha opositora como de la Concertación y de la medidas de gobierno. La única medida al respecto ha sido el aumento del IVA, de carácter eminetemente regersivo.

Así, como el modelo de desarrollo previo basado en la industrialización y el Estado tenía ciertos defectos intrínsecos que había que corregir desde fuera de él, éste también tiene perversiones que forman parte de su naturaleza. En efecto, el modelo económico predominante no favorece, como lo hacían la industrialización y el Estado en otras décadas, la creación de bases materiales e institucionales donde puedan constituirse actores sociales que organicen establemente las nuevas demandas y que puedan expresarse o negociar con representantes en la instancia políca, es decir, los partidos. Al desestructurar la acción colectiva, se privilegia sólo la dimensión corporativa ligada al poder económico y se generan acciones defensivas esporádicas. A ello hay que agregar la ausencia de una institucionalidad adecuada tanto en el sentido de normas y regulaciones como de organización del Estado para procesar los conflictos y demandas, lo que se ha demostrado en los escándalos por denuncias de coimas y fraudes en el sector público durante 2002 y 2003 y que llevó a una agenda de reformas parciales importantes, pero que no transformaron la estructura del Estado ni su relación con la sociedad[6].

El descontrapeso entre organizaciones sociales, especialmente de los sectores más vulnerables, y los actores más poderosos que actúan en la economía, los poderes fácticos, no sólo parece no haber disminuido sino que se ha agudizado. Esto hace que los actores sociales debilitados, se vean obligados a poner como única tarea de su acción

[6] Se trata de las reformas en 2003, respecto de temas de probidad y administración del Estado, que incluyeron entre otras, limitaciones a los fondos reservados de algunos ministerios y también el financiamiento público de las campañas electorales, producto de un acuerdo entre oposición por una lado, liderada por el Presidente de la UDI Pablo Longueira, y el Presidente Lagos con los partidos de la Concertación, por otro, al producirse escándalos ligados a problemas de coimas, sobresueldos en la administración pública e irregularidades en el uso de fondos públicos.

sus propios problemas particulares, con lo que disminuye su preocupación por las grandes cuestiones nacionales y aumenta su demanda puramente corporativa, lo que se refuerza al no contar como en otra època con un sistema partidario en el que los sectores sociales se sientan escuchados e incorporados por la clase política, con la excepción de la derecha que expresa directa y únicamente los intereses empresariales y militares, y del Partido Comunista, sin mayor proyección política, que suma cualquier descontento contra los gobiernos de la Concertación.

Si en algo parece ser exitoso el modelo económico chileno es en su inserción en el proceso de globalización. Es evidente que la economía chilena ha sido impactada por la globalización de una manera más fuerte que otras del continente, entre otras cosas por su propia dependencia histórica a los fenómenos externos en todos los planos, pero también por la naturaleza de su economía, más abierta que las otras, en parte porque la apertura y los ajustes se hicieron antes que la globalización se impusiera como el fenómeno central de fin de siglo. En materia económica, más de un 50% del PGB está vinculado al sector externo.

Los cuadros siguientes muestran la evolución de indicadores socio-ecómicos bajo los gobiernos democráticos.

Cuadro 11
Comparación del desempeño de los gobiernos democráticos según variables macroeconómicas claves: 1974-2005

Variable	Durante el gobierno de: Pinochet 1974-89	Concertación 1990-2005	Aylwin 1990-93	Frei R-T. 1994-99	Lagos 2000-05
Crecimiento del PIB (%)	2,9	5,6	7,7	5,4	4,3
Crecimiento de las exportaciones (%)	10,7	8,5	9,6	9,7	6,5
Tasa de inflación [b]	79,9	7,8	17,7	6,1	2,9
Tasa de desempleo [c]	18,1	8,3[d]	7,3	7,4	10,1[d]
Salario real (1970=100)	81,9	122,3[d]	99,8	123,4	138,9[d]
Inversión bruta fija (% del PIB) [e]	15,3	23,8	21,0	25,4	24,5
Superávit del gobierno general (% del PIB)	0,3	0,8[d]	1,6	1,1	0,0[d]
Superávit estructural (% del PIB)		0,7[d]	0,4	0,8	0,8[d]

Fuentes: Tomado de Ffrench-Davis (2003, cuadro I.1) y actualizaciones de Ffrench-Davis. Basado en Banco Central de Chile y DIPRES. Las cifras de 2005 son muy provisionales. Citado por Huneeus, C Las coaliciones de partidos. ¿Un nuevo escenario para el sistema partidista chileno? Revista Política. Santiago Vol 45. Primavera 2005

[a] Tasas acumulativas anuales de crecimiento del PIB y exportaciones; promedio de tasas anuales en inflación y desempleo.

[b] Diciembre a diciembre.

[c] Incluyen como desocupados a los trabajadores de los programas especiales de empleo; la cifra sin ellos es 13,3% en 1974-89, 7,3% en 1994-99 y 9,0% en 2000-04.

[d] Cifras a 2004.

[e] En pesos de 1996.

Cuadro 12

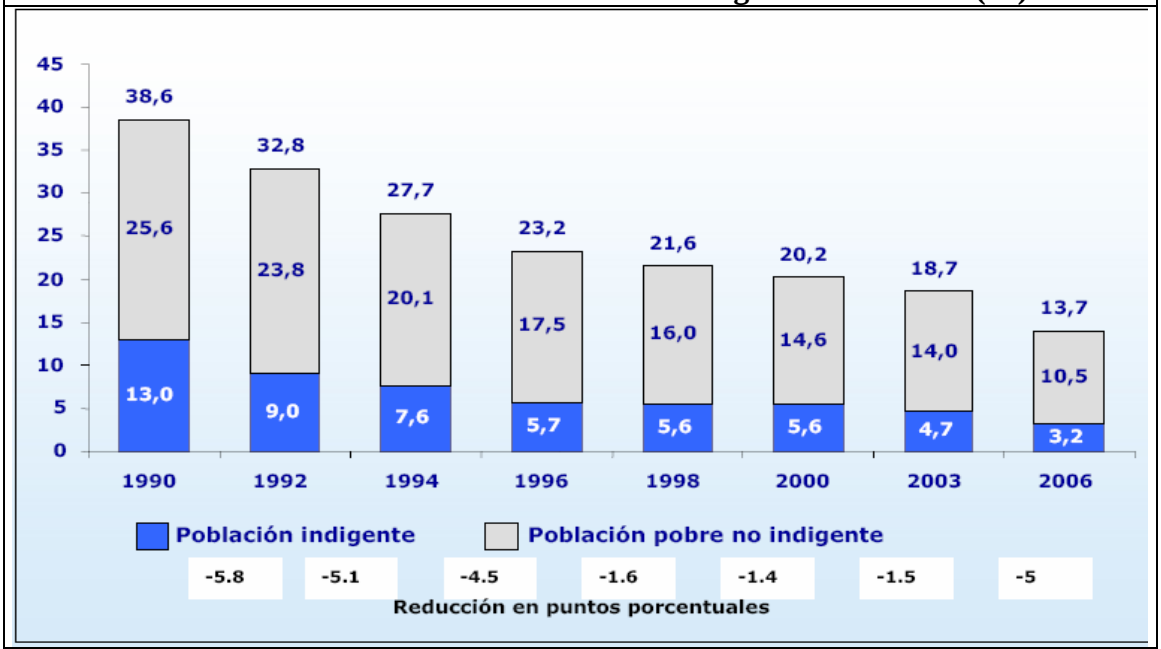
Población en Condiciones de Pobreza e Indigencia 1990-2006

	1990	2006	Variación porcentual
Indigencia	1.674.736	516.738	-69.1
Pobreza no indigente	3.293.566	1.692.199	-48.6
Total Pobreza	4.968.302	2.208.937	-55.5

Fuente: Encuesta CASEN 2006

Gráfico 2

Evolución de la Pobreza e Indigencia 1990-2006 (%)



Fuente: Encuesta CASEN 2006

Cuadro 13

Crecimiento Económico y Pobreza

	PIB	Variaciones Pobreza	Variaciones Indigencia	Elasticidades Pobreza	Elasticidades Indigencia
Años	%	%	%	Puntos porcentuales	
1992/90	21,1	-11.2	-27.5	-0.53	-1.30
1994/92	13.1	-13.5	-13.9	-1.03	-1.06
1996/94	18.8	-13.0	-21.3	-0.69	-1.13
1998/96	10.0	- 4.6	1.5	-0.45	-0.15
2000/98	3.7	- 4.6	1.5	-1.23	-0.41
2003/00	9.8	- 4.4	-13.3	-0.45	-1.36
2006/03	16.51	-24.9	-28.9	-1.45	-1.75

Fuente: CEPAL, 2006.

En: CASEN 2006

Cuadro 14
Distribución del ingreso en Chile

	1990	1992	1994	1996	1998	2000
Indice 20/20	**14,0**	**13,2**	**14,3**	**14,6**	**15,5**	**15,3**
Indice 10/40	**3,5**	**3,3**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,6**
Coeficiente de Gini	**0,58**	**0,57**	**0,58**	**0,57**	**0,58**	**0,58**

*Se excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.
Fuente: MIDEPLAN, Encuestas CASEN 1990-2000.

Cuadro 15

Ingresos Autónomos, Brecha Distributiva y Coeficiente de Gini 1990-2006

	Años							
	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2003	2006
Indice 20/20	13,98	13,17	14,01	14,83	15,57	14,41	14,51	13,10
Coeficiente de Gini*	0,57	0,56	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	0,54

* Personas

Fuente: Ecuesta CASEN 2006

Respecto de la pobreza, la política de los gobiernos de la Concertación ha implicado, entre otras medidas, un aumento sostenido del gasto social, la creación de agencias especiales como el FOSIS en Mideplan para proyectos de los proios actores y la Comisión Nacional para la Superación de la Pobreza, el Programa Chile Solidario y Puente que implican una fuerte asistencia directa a todas las familias de los sectores indigentes y, recientemente, la definicióon de las políticas sopciales, más allás de sus aspectos focalizados como una política orientada a respetar y promover derechos garantizados judicialmente en el marco de un Estado de protección, ejemplo de lo cual serían el Plan Auge en salud, la expansión de la educación pre-escolar y la proyectada reforma previsional.

Vale la pena indicar que los últimos datos de la Encuesta CASEN dados a conocer en Junio de 2007 y cuyos cuadros se consignan arriba muestran un mejoramiento en la situación de pobreza e indigencia, producto de los programas y principios enunciados

Con todo, hay dos consideraciones en esta materia. Por un lado existe un debate sobre el modo de cálculo de la pobreza en el sentido quesi se recalcula en términos actuales el valor de la canasta básica, la pobreza alcanzaría a cifras cercanas al doble de lo que arroja la Encuesta CASEN[7], lo que no implica desconocer la tendencia positicva, pero sí relativizar los resultados estadísticos. Por otro, es evidente que cualquiera sea el cálculo, lo que varía es una línea estadística y no una línea sociológica, es decir, se puede ya sea caer en cualquier momento de la línea, ya no poseer las condiciones estructurales de sustentabilidad de una situación de no pobreza, lo que significa seguir siendo sociológicamente pobre aunque se esté por encima de la línea de pobreza en un determinado momento.

Respecto de la distribución de ingresos, sólo en el último período se logra un cierto mejoramiento, pero éste es más aparente que real si se calcula la distancia en términos de deciles o percentiles[8]. También cabe señalar que la distribución de ingresos autónomos mejora considerablemente a favor de los más pobres cuando interviene la acción del Estado a través de ayudas y subsidios.

IV. Síntesis y Conclusiones.

La matriz socio-política clásica chilena porivilegió la articulación e imbricación entre fuerzas sociales y partidos políticos. Fueron éstos, de centro y de izquierda en conjunto en los treinta y separadamente en los sesenta, los que jugaron el papel de "coalición redistributiva"[9], lo que expresaba el rol central de la política en la definición y trayectoria del modelo de desarrollo.

El régimen militar y las transformaciones socio-económicas impulsadas por él, que significaron básicamente el paso a un nuevo modelo de desarrollo, tuvieron una significación más profunda que la mera desarticulación de la sociedad predominante hasta los setenta. Se intentó reemplazarla por otra. En su tipo puro, se trataba de un proyecto neo-liberal, que implicaba, más que la autonomización de la economía respecto de la política, la utopía de la subordinación de ésta a aquélla. Se apostaba a los mecanismos de mercado como la nueva "columna vertebral" constitutiva de actores sociales que reemplazara tanto el sistema de representación partidaria como el rol referencial central del Estado.

Desde el punto de vista de la desarticulacion de la matriz previa, el régimen militar tuvo éxito. Desde la perspectiva de su reemplazo por la matriz neo-liberal, fue un fracaso. Ni quedó en pie el antiguo modelo socio-económico ni se impuso consistentemente el modelo neo-liberal en lo que no tuviera que ver con la estrategia de crecimiento, al menos desde que se estableció un régimen democrático, por baja que sea la calidad de éste. Junto a la descomposición del modelo previo, subyacen elementos de él en una nueva articulación

[7] Felipe Larraín, El Mercurio 1 de julio 2007. Hugo Fazio, Carta Económica, Santiago, 17 Junio 2007
[8] H. Fazio, op cit.
[9] Wiggins, S, Shejtman, A, Gray, G "Bolivia case study: an interpretative summary", IPPG Working Paper Series Nº1, 2006

con rasgos parciales del proyecto neo-liberal y con rasgos nuevos que no pertenecen ni a uno ni a otro.

De modo que el Chile de la post-transición presenta el revés de la tesis clásica de Aníbal Pinto[10] aplicable a la matriz clásica, que definía una contradicción básica entre una economía atrofiada y un sistema político institucional y cultural desarrollado Esta debilidad del sistema económico, planteaba la cuestión de autonomizar la economía de sus amarres políticos. Hoy día el problema es exactamente el inverso: una economía en despegue, al menos hasta mediados de los noventa y recuperado su ritmo hacia el 2005, pero sobre todo despegada del país y la sociedad. Frente a ello, un sistema político, institucional y cultural atrofiado. Baste recordar los enclaves autoritarios[11] (Constitución e institucionalidad, clima de impunidad por la violación de los derechos humanos bajo la dictadura y solución parcial en ,materia de justicia, existencia de actores no democráticos expresados en el "pinochetismo político") la debilidad del sistema de descentralización y regionalización, la crisis del sistema educacional y el colapso de la educación superior, la enorme debilidad de los actores sociales especialmente para negociar con el poder económico, el retraso apenas superado de la institucionalidad sobre la organización familiar[12] las dificultades para redefinir un nuevo rol dirigente y protector del Estado. Sin desconocer los avances que el régimen democrático ha hecho en varios de estos planos, éstos son siempre parciales porque quedan encerrados en el marco institucional heredado. A su vez, la naturaleza del modelo socio-económico ha impedido que en momentos de crisis económica, como en 1998 y 1999 se cuente con los recursos institucionales que permitan afrontarla.

Así, pareciera que estamos frente a una matriz socio-política o una sociedad de tipo híbrido respecto de su modelo de constitución predominante en la mayor parte del siglo XX. Ella presenta un rasgo de continuidad y un rasgo de ruptura, además de elementos que se definen autonómamente y que son propiamente emergentes[13].

La ruptura consiste en que la economía se ha autonomizado de la política, y se ha sometido aparentemente a su propia dinámica de desarrollo, en la que el Estado sólo acota pero no define la dirección Pero esto no significa que la economía obedezca a dinámicas propias del desarrollo nacional, sino que es esta autonomización respecto de la política o del Estado, va acompañada de una nueva subordinación o dependencia, esta vez respecto de las fuerzas transnacionales de los mercados. Quizás el elemento central de esto sea que el modelo socio-económico de crecimiento ha dejado de ser un modelo de desarrollo, o dicho de otra manera, que la economía no puede asegurar por sí misma la integración social, como puede verse en el caso del empleo.

[10] Ver A. Pinto (2001)
[11] M.A.Garretón,Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones (Fondo de Cultura Económica, 1995)

[12] Recordemos que Chile fue hasta el comienzote esta década, el único país occidental donde no existía ley de divorcio. Por otro lado, cabe reconocer un avance importante en las legislaciones sobre filiación, violencia familiar, tuiciones y no discriminación de la mujer, entre otras.
[13] Sobre las transformaciones de la sociedad chilena en las últimas décadas ver, Varios autores, Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. (Cuadernos del Bicentenario, Santiago, 2003),.

Los conflictos sociales parecieran reflejar la contradicción entre un país que resuelve relativamente bien sus problemas económicos de corto plazo, pero que ha dejado pendientes o mal resueltos los problemas institucionales, políticos y culturales y también los que se refieren a un modelo de desarrollo de largo plazo sustentable socialmente, donde el problema central es el de la desigualdad social. Frente a las fórmulas de desarrollo seguidas antes de la dictadura militar y frente al modelo neo-liberal, los gobiernos democráticos han definido su estrategia como de desarrollo con equidad. Tanto en el campo del crecimiento económico, hasta la crisis de 1997-1998, como en el de la superación de la pobreza y en el del gasto social del Estado, los avances han sido significativos. Sin embargo, las desigualdades socio-económicas (ver cuadros 14 y 15) se mantienen y, en algunos casos aumentan[14].

Es evidente que ya no puede plantearse como la problemática chilena ya no es la "transición a democracia y a la economía de mercado", como fue indicado hace ya más de una década. a comienzos de los noventa. Si la democracia alcanzada es incompleta y de débil calidad, ya no estamos más en situación de transición, sino de la necesidad de una profunda reforma política. Por otro lado, el modelo de economía de mercado neo-liberal o "modelo privatizador" está agotado como base de un desarrollo nacional integrado y auto sustentable, aquí y en todas partes del mundo. El mundo se mueve dificultosamente hoy entre las tendencias globalizadoras y la necesidad de reponer el papel orientador de los Estado nacionales y sus alianzas.

Sin volver a la antigua subordinación de la economía a la política, lo que es prácticamente imposible, cabe pensar en fórmulas alternativas a las actuales que pasan por devolver al Estado, a nivel nacional y de los bloques supra nacionales, un rol dirigente en el desarrollo, establecer marcos normativos regulatorios sobre las fuerzas del mercado y asegurar el control ciudadano sobre tales marcos y fuerzas. En otras palabras, reconociendo que política y economía son cosas distintas y autónomas, se trata también de introducir los principios éticos de la democracia en el funcionamiento de los mercados.

Dicho de otra manera, lo que está en juego en los próximos años es la existencia del país como comunidad con un sentido colectivo en el que se expresa su pluralidad y diversidad. El proyecto de país, sus formas de convivencia, las identidades que lo constituyen y su inserción autónoma en el mundo globalizado, son el meollo de la política hoy día.

De modo que los problemas fundamentales del país post-transición tienen que ver con la organización de la polis, de la capacidad de conducción, de hacer que en la política se expresen los problemas culturales y sociales y que la economía se ligue al desarrollo general de la sociedad. Ello quiere decir que no hay propiamente una crisis de lo político y su legitimidad, ni siquiera en los jóvenes[15]. Lo que hay es una crisis de la capacidad y de la actividad políticas para dar cuenta de lo político y no girar en torno a sí misma. A la larga, el riesgo es que ello lleve a una crisis de legitimidad.

---

[15]. Lo que no significa que no haya una distancia estructural entre jóvenes y politica, que no ha dañado sin embargo la legitimidad de la política en su ámbito propio. M.A. Garretón y T. Villanueva, "Política y jóvenes en Chile. Una reformulaci\n" (Participa y Fundación F. Ebert, Santiago, 1999)

En la situación actual el congelamiento de la dimensión político-institucional, respecto de una base económica dependiente de la economía transnacional, se explicaría por dos factores. Por un lado, la presencia de los enclaves autoritarios institucionales defendidos por la oposición de derecha heredera del régimen militar. Por otro, la ausencia de modelos y proyectos alternativos de índole político-cultural, una de cuyas causas es el mismo éxito obtenido por los gobiernos de la Concertación.. Dada esta ausencia, predominan las "fuerzas naturales" de la economía transnacional.

Pareciera ser muy temprano para zanjar la cuestión de si estamos ante una matriz emergente de relaciones entre Estado y sociedad, o si se trata de una situación de transición a otro modelo que no conocemos. Las interrogantes abiertas por la situación económica mundial y el futuro de procesos de globalización e integración económica acentúan esta duda.

En todo caso, el futuro de la sociedad chilena radica en su capacidad de construcción de un sistema socio-político que rescate la idea de una comunidad nacional que no se reduce a un mercado ni a conjunto de instrumentos y técnicas. Lo que el país necesita ya no es un "milagro económico" sino un gran salto adelante que debe ser político, institucional y cultural.

Cuadro 16 **Cuadro Resumen**				
Período	**Matriz socio-política y actores sociales**	**Contexto político-institucional**	**Reformas económicas**	**Resultados /efectos sociales (pobreza)**
1930-1973	Nacional-estatal, popular-partidaria. Estado Partidos Trabajadores	Crisis económica y replaneamiento del rol del estado hacia el intervencionismo económico	Se crea una infraestructura social y productiva desde el Estado. Se instala el modelo sustitutivo de importaciones	Mejoran momentáneamente las condiciones de vida gracias al sustento del Estado, pero posteriormente colapsa el sistema
1973-1990	Desarticulación de la matriz sociopolítica. Estado (militares) Empresarios	Golpe de estado, cierre del congreso y prescripción de los partidos. Diactura violenta	Desmantelamiento del aparato estatal y privatización de la actividad económica, instauración del neoliberalismo	Se estabilizan los índices macroeconómicos sacrificando el empleo y los programas sociales.
1990-2007	Matriz híbrida entre un proyecto neoliberal corregido y elementos socialdemócrata Empresarios Estado Partidos	Retorno a la democracia y ajuste del sistema neoliberal de la dictadura. Democratización paulatina y herencias de la dictadura.	Modernización del Estado, liberalización de los mercados, aumento del gasto social, privatizaciones.	En 16 años se logró reducir casi en 50% la pobreza, sin embargo la desigualdad se mantiene como una de las más altas del mundo

BIBLIOGRAFIA

Angell, Alan. 1993. "Chile Since 1958." En Chile Since Independence, Leslie Bethell ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Banco Central de Chile. 1995. Modernización de la gestión pública en Chile. Antecedentes, orientaciones actuales y avances. Paper presentado en el Seminario Experiencias Internacionales de la Gestión Pública y su Relevancia para Chile, Santiago, Marzo.

Boeninger, Edgardo. 1997. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Editorial Andrés Bello.

Braun Juan y otros, Economía chilena 1810 – 1995: Estadísticas Históricas. Documento de Trabajo 187, Instituto de Economía PUC, enero 2002,

Bulmer-Thomas, Víctor La historia económica de América Latina desde la independencia. Fondo de Cultura Económica, México 1998.

Corbo, Vitorio Problemas, teorías del desarrollo y estrategias en América Latina. Estudios Públicos Nº 32. 1988

Correa S., Sofía et al. 2001. Historia del siglo XX chileno: balance paradojal. Santiago: Editorial Sudamericana.

Cunill, Nuria. 1997. Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formar de gestión pública y representación social. Caracas: Nueva Sociedad.

Del Pozo, José. Historia de América Latina y el Caribe 1825-2001.LOM, Santiago, 2002

Díaz, Álvaro. 1994. "Tendencias de la reestructuración económica y social en Latinoamérica." Revista Mexicana de Sociología No. 14 (Octubre-Diciembre).

Drake, Paul. 1993. "Chile 1930-1958." En Chile Since Independence, ed. Leslie Bethell. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Drake, Paul e Iván Jaksic, eds. 1999. El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa. Santiago: LOM Ediciones.

Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Ffrench-Davis, Ricardo. 1973. Políticas Económicas en Chile 1957-1970. Santiago: CIEPLAN-Universidad Católica de Chile.

Ffrench-Davis, Ricardo. 1990. Desarrollo económico, inestabilidad y desequilibrios políticos en Chile. 1950-1989. Colección Estudios No. 28. Santiago: CIEPLAN.

Ffrench-Davis, Ricardo. Entre neoliberalismo y crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile. Siglo XXI Eds. B. Aires, 2004

Ffrench-Davis, Ricardo y Dagmar Raczynski. 1990. The Impact of Global Recession and National Policies on Living Standards: Chile 1973-1989. Notas Técnicas No. 97 (Noviembre). Santiago: CIEPLAN.

Flisfisch, Angel. 1993. "Los desafíos del Estado chileno en la década de los noventa." En La reforma del Estado: más allá de la privatización, ed. Klaus Bodemer. Montevideo: FESUR.

Fuenzalida, L. "Ocupación, desigualdades y pobreza. aspectos crónicos y política económica de largo plazo" Estudios Públicos nº28, 1987

Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (FNSP). 1996. La pobreza en Chile. Un desafío de equidad e integración .social 1: 52. Santiago: FNSP.

Ghai, Yash P., Robin Luckham y Francis G. Snyder, eds. 1988. The Political Economy of Law: A Third- World Reader. Delhi y New York: Oxford University Press.

Garretón, Manuel Antonio. 1994. "New Relations between State and Society in Latin America". En Redefining the State in Latin America, ed. Colin Bradford. Paris: OECD.

Garretón, Manuel Antonio. 1995. Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

Garretón, Manuel Antonio. 1996. "Transformación del Estado en América Latina." ;Espacios Revista Centroamericana de Cultura Política. No. 6 (Octubre - Diciembre).

Garretón, Manuel Antonio. 1999. "Balance y perspectivas de la democratización política chilena." En La caja de Pandora el retorno de la transición chilena, Amparo Menéndez-Carrión y Alfredo Joignant Rondón. Santiago: Planeta/Ariel.

Garretón, Manuel Antonio. 2000a. La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al fin de siglo. Santiago: LOM Editores.

Garretón, Manuel Antonio. 2000b. Política y sociedad entre dos épocas: América Latina en el cambio de siglo. Rosario, Argentina: Ediciones Horno Sapiens.

Garretón, Manuel Antonio. Forthcoming 2002 or 2003. "La (in)conducción política del segundo gobierno democrático." Recopilación sobre el gobierno de Frei en proceso. Santiago: FLACSO.

Garretón, Manuel Antonio y Malva Espinosa. 1992. "Reforma del Estado o cambio en la matriz socio-política." Perfiles Latinoamericanos. México.

Garretón, Manuel Antonio y Malva Espinosa. 1994. From the Adjustment Policies to the New Relations between the State and Society. Paris: Independiente : Comisión para la Población y la Calidad de Vida.

Garretón, Manuel Antonio y Malva Espinosa. 1995. Tendencias de cambio en la matriz' socio-política chilena. Una aproximación empírica. Informe final Proyecto Fondecyt. Santiago (Marzo).

Gomez Sergio, Echenique Jorge. La agricultura Chilena. Las dos caras de la modernización. FLACSO Chile, Santiago 1998.

Góngora, Mario. 1986. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago: Editorial Universitaria.

Hachette, Dominique. 2000. "Privatizaciones: Reforma estructural pero inconclusa." En La transformación económica, eds. Felipe Larraín y Rodrigo Vergara. Santiago: CEP.

Heise Julio, 150 años de evolución institucional. Ed. Andrés Bello, Santiago 1977.

Lagos, Ricardo. 2000. Mensaje presidencial 21 de Mayo del año 2000. Santiago: Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Lagos, Ricardo. 2001. Mensaje presidencial del 21 de Mayo del 2001. Santiago: Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Larraín, Felipe y Rodrigo Vergara, eds. 2000. La transformación económica de Chile. Santiago: CEP.

Marcel, Mario. 1989. "Privatización y finanzas públicas." Colección Estudios No. 26. Santiago: CIEPLAN.

Marcel, Mario y Carolina Tohá. 1998. "Reforma del Estado y la gestión pública." En Construyendo Opciones. Propuestas Económicas y Sociales para el Cambio de Siglo, eds. René Cortazar y Joaquín Vial. Santiago: CIEPLAN-DOMEN.

Martner, Gonzalo. 1988. El gobierno del presidente Salvador Allende, 1970-1973: una evaluación. Concepción, Chile: Programa de Estudios del Desarrollo Nacional: Ediciones Literatura Americana Reunida.

Meller, Patricio. 1996. Un siglo de economía política chilena. 1880-1990. Santiago: Editorial Andrés Bello.

Menéndez-Carrión, Amparo y Alfredo Joignant Rondón. 1999. La caja de Pandora el retorno de la transición chilena. Santiago: Editorial Planeta/Ariel.

Moulián, Tomás. 1982. Desarrollo político en Chile. Colección de Estudios No. 18. Santiago: CIEPLAN.

Moulián, Tomás. 1997. Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago: Ediciones LOM.

Muñoz, Oscar. 1998. "Estado, mercado y política. Chile en los años noventa." En Construyendo Opciones. Propuestas Económicas y Sociales para el Cambio de Siglo, eds. René Cortazar y Joaquín Vial. Santiago: CIEPLAN-DOMEN.

North Douglass C., La evolución histórica de las formas de gobierno. · Revista de Economía Institucional, Colombia 2000

Oyarce, Héctor. 1997. "Los procesos de modernización, el Estado y la política." Santiago. Manuscrito.

Pinto, Anibal. 1971. Tres ensayos sobre América Latina y Chile. Buenos Aires: Solar-Hachette.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 1994. Informe sobre Desarrollo Humano. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Raczynski, Dagmar. 1994. "Políticas sociales y programas de combate a la pobreza en Chile: balance y desafíos." Colección de Estudios No. 39. Santiago: CIEPLAN.

Riveros Luis: Desempleo distribución del ingreso y política social. En rev CEP nº 20, 1985

Smith, William C., Carlos H. Acuña y Eduardo A. Gamarra, eds. 1994. Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform: Theoretical and Comparative Perspectives for the 1990s. Coral Gables, Fla.: North-South Center Press de la Universidad de Miami.

Suárez, Christian. 1990. "Reseña del Gobierno de Chile." Selección de Documentos Clave 7. Caracas: CLAD.

Toloza, Cristián y Eugenio Lahera. 1998. Chile en los noventa. Santiago: Dolmen Ediciones.

Varios autores, Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. (Cuadernos del Bicentenario, Santiago, 2003),.

Vergara, Pilar. 1985. Auge y caída del neo liberalismo en Chile. Santiago: FLACSO.

Wiggins, S, Shejtman, A, Gray, G “Bolivia case study: an interpretative summary”, IPPG Working Paper Series Nº1, 2006